



Desplazamiento, derechos humanos y comportamiento electoral

Ruben Dario Guevara Corral
Asociacion de Profesionales para el Desarrollo Social
Universidad del Valle – Colombia

e mail cefeitcher@telesat.com.co

Recebido julho de 2002

Aprovado para publicação em agosto de 2002

Resumo

O artigo mostra a relação entre deslocamento e direitos humanos na conjuntura eleitoral passada da Colômbia. Enfoca o fenômeno do deslocamento com um fato histórico que repercute na sociedade em geral e que altera as relações sociais, políticas e econômicas onde o Estado colombiano se tem mostrado impotente para controlar os setores em conflito que hoje alteram a ordem institucional através de ameaças à governabilidade ao considera-los como "objetivo militar".

Palavras-chave

deslocamento, direitos humanos, comportamento eleitoral

Resumen

Con este trabajo se pretende abrir un espacio de trabajo investigativo para mostrar la relación desplazamiento y derechos humanos en la coyuntura electoral pasada de Colombia. Por otra parte, enfocar el fenómeno del desplazamiento como un hecho histórico que repercute en la sociedad en general y que altera las relaciones sociales, políticas y económicas en donde el Estado colombiano, se ha mostrado impotente para controlar los sectores en conflicto que hoy alteran el orden institucional a través de las amenazas a la gobernabilidad al considerárseles como "objetivos militares".

Abstract

This article addresses the relation between displacement and human rights in the last electoral conjuncture in Colombia. It also focuses on the phenomenon of displacement as a historical fact that reverberates in the general society and which alters social, political and economic relations. In this context, by considering them as a "military objective", the Colombian State has demonstrated itself to be impotent in controlling the sectors in conflict that currently alter the institutional order through threats to governability.

Keywords

displacement, human rights, electoral behavior

Introducción

Este ensayo se desprende del trabajo investigativo: *Mujeres desplazadas por el conflicto interno en las ciudades de Cali y Popayán*. Investigación que trata de dar cuenta, en una situación particular, de las causas y consecuencias - de caso-, en la perspectiva de género, en dos ciudades y en un tiempo específico, de las mujeres desplazadas por el conflicto interno. El objetivo general es el de caracterizar a la población desplazada, las condiciones de las desplazadas y la manera en que ellas son tenidas en cuenta como sujetos sociales en las políticas del Estado y de qué manera éste contribuye a solucionar su situación particular. Las reflexiones finales de la investigación, muestran cómo desde una visión amplia, la dimensión del fenómeno del desplazamiento y su correlación con los derechos humanos, deja ver unos espacios que ayer y hoy son convenientes trabajar para dar explicación acorde a las nuevas realidades del desplazado y a las circunstancias políticas del país que los condicionan. Esto último es lo que me propongo realizar en este ensayo, partiendo de la coyuntura política de las elecciones para cuerpos colegiados y presidente de la república del año 2002, en Colombia y mostrar cómo ellas se sucedieron en el país y cómo están manifestándose, así como su resonancia implícita en los derechos humanos de los desplazados.

Durante el quehacer investigativo, me pude dar cuenta, que no se pueden recortar ni hacer a un lado las contradicciones históricas generales y las situaciones estructurales particulares del país que originan el desplazamiento y por ende, el problema de las mujeres como desplazadas.

Por eso, este ensayo, se propone dar cuenta de las manifestaciones y circunstancias generales de un proceso electoral y con una aproximación analítica ir como explicando lo que sucedió para suponer lo que puede suceder en el país con respecto a los derechos humanos de una población de desplazados.

La etapa del trabajo de campo, permitió recoger información directa con la población afectada por el desplazamiento pero la lectura paralela de documentos y fuentes secundarias de información, obligaron a hacer una reflexión con profundidad de una serie de aspectos y eventos que a diario se suceden y que por ser significativos, se van manifestando como condicionantes y determinantes para la explicación del desplazamiento en general y de las desplazadas en particular con respecto a los derechos humanos.

Una Breve Historia de Eventos y Sucesos

La historia reciente del país está llena de altos y bajos difíciles de interpretar por quienes están metidos en esta horrible tarea de dar cuenta de esa pesadilla, resultado de una guerra irracional, que deja secuelas e intereses fallidos de represión y diálogo ante esa persistencia de lucha armada, de luchas sociales que buscan la conformación de nuevas realidades y también por esas dinámicas urbanas marcadas por el éxodo, el desarraigo y la voluntad de volver a empezar.

El desplazamiento forzado, como salida, de una localidad hacia otra región ha constituido una respuesta obligada en el conflicto armado colombiano. La historia colombiana con sus procesos está repleta de acciones de supervivencia, de resistencia y se observa cómo, a manera de puentes forzados, se han ido tejiendo las relaciones entre el campo y la ciudad, entre regiones socio-culturalmente distintas y entre países fronterizos. Aunque el desplazamiento constituye una ruptura, también es un punto de encuentro y desencuentro que posibilita las relaciones sociales de quienes, provenientes de comunidades generalmente caracterizadas por tradiciones, se enfrentan a una ciudad unipersonal, agreste y en ella, nuevas formas de representaciones, de experiencias y expectativas surgen para afrontar la realidad.

Las familias que se han desplazado del campo a la ciudad tejen historias nuevas, salpicadas de resentimientos profundos y odios naturales, tensiones, dolor y pérdidas por la forma como se

han visto obligadas a salir, pero con el tiempo, ellos, aunque presionan de manera contundente a la familia y reviven culpas, se disuelven y se moldean a través de una oralidad agradable por medio de la cual recrean a los grupos de amistad y dan rienda suelta a unos recuerdos imaginados.

Espacio y tiempo se convierten en la ayuda imprescindible de un nuevo modo de vida en donde los conflictos diferentes se atenúan, se modifican, cuando no, se ven menguados ante las circunstancias presentes.

La guerra que atraviesa la vida individual, familiar y colectiva de las personas, deja marcas en sus historias, modifica su modo de vida y sus expresiones. La guerra destruye, capta y recrea la acción colectiva existente al fragmentar y polarizar los referentes identitarios existentes. En este sentido, guerra y desplazamiento, son a la vez que generadores de fragmentaciones espaciales y de fronteras internas, provocadores de dinámicas de destrucción y reconstrucción de referentes identitarios y territoriales que se constituyen en nuevos códigos de relación social. Así, los pobladores en distinta medida y con diversa responsabilidad se van configurando como víctimas y actores de esa guerra (Osorio 2002).

La realidad ciudadana

La aguda contradicción entre los actores armados que originan el conflicto y con él, el desplazamiento, ha tenido una cierta complicidad del Estado. Las cifras del Codhes, nos muestran que en el año 2001, huyeron 937 personas por día y que 341.925 buscaron refugio en ese año, siendo entonces, ese período, el de mayor desplazamiento forzado en el país y siguen siendo los departamentos del Cauca, Valle, Antioquia y Chocó los más afectados.

Observar la movilidad por razones de violencia, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2002, es mostrar que se desplazaron 90.179 personas. Es decir, un hogar cada 10 minutos y 42 personas por hora. El 35% de las personas hicieron parte de éxodos masivos. Aunque se mantuvo la tendencia del último trimestre del 2001, cuando se desplazaron cerca de 91.000, el fenómeno se expandió geográficamente. De hecho, aumentó a 31 el número de departamentos receptores. El año pasado los desplazados llegaron a 26 departamentos. Las ciudades que más desplazados recibieron fueron Santa Marta (16.441), Bogotá (14.000) y Medellín (5.000).

La ruptura del proceso de paz con las FARC¹ tuvo que ver con el desplazamiento.

La crisis se sigue ahondando en lo que respecta al orden social y aunque el Estado es un monopolizador legítimo de la fuerza, lo cierto es que algunos de sus organismos estimulan con discursos belicosos, con auxilios económicos y otros elementos propios de una logística, a los grupos paramilitares que sacan tajada de la situación y afectan de manera directa a la población civil.

Pero también, la ausencia de programas preventivos y de protección, coherentes y consistentes para la atención a la población desplazada en el país, muestra la despreocupación de las entidades nacionales e internacionales y del Estado quien ha prestado oídos sordos a un tema que es de singular importancia y de explosiva situación, no obstante contar con una legislación de avanzada para protección de los desplazados.

El Gestor de Paz del Valle del Cauca manifestó que es “una bomba de tiempo” el problema de los desplazados en Cali y en el Valle, “no hay un rubro del Gobierno local que esté destinado a atender a la población creciente de desplazados a Cali. Vamos a emprender un proceso de apoyo institucional para dar soluciones inmediatas de asistencia humanitaria, vamos a tocar todas las puertas” –dijo-. La violencia que arrecia en el corredor que une los municipios de Palmira, Pradera Florida y El Cerrito y Los Farallones de Cali, requieren una pronta y eficaz intervención del Estado con políticas de largo plazo y convenios con la Red de Solidaridad Social que asienten a las familias y prevengan su desplazamiento a través por ejemplo, de una Unidad de Atención al Desplazado.

Ellos no parecen entender que las disputas territoriales de paras y guerrilla han obligado a 54.074 personas a huir en 400 municipios del país, pertenecientes a los departamentos del Cauca, Valle, Chocó y Antioquia principalmente, haciendo parte de esa gran masa de desplazados que llega a la cifra de 1.512.925 personas que, en los últimos cinco años, han huido (cifras del año 2000, hoy ese número ha ascendido a más de 2 millones de personas desplazadas). Considerados como los principales expulsores de población, estos departamentos enfrentan problemas no sólo porque reciben sino porque no encuentran salida a una situación social que ya se torna insostenible para sus menguadas arcas. Los desarraigados, se disputan un pedazo de tierra dónde ubicarse y también comida para sobrevivir, mientras el Estado se preocupó

por encontrar cómo ellos expresarían su participación política con el derecho al voto en las pasadas elecciones.

El desplazado en la ciudad entra a compartir de alguna manera los comportamientos sociales y políticos de quienes, como él, ocupan el espacio barrial o de un asentamiento precario. Dado que en un principio es muy difícil establecer vínculos comunitarios, su apatía por compartir con otros la cotidianidad lo ensimisma, lo torna unipersonal y lo aísla. Pero con el tiempo y presionado por las necesidades se obliga a compartir, a hacer parte de un todo que clama por diversos medios la atención del Estado y toma partido en las luchas sociales.

Pero uno de los problemas que más preocupan a los desplazados de algunas regiones, como las de los Albergues Campesinos de Tulúa en el Valle del Cauca que recoge 87 familias desplazadas, son las amenazas continuas de las Auc² (Bloque Calima) quienes los conminan a regresar a sus tierras de origen en un tiempo perentorio, so pena de ser objetivos militares y que ya ha venido poniendo en acción con la muerte de uno de los abogados defensores y una líder comunitaria.

Causas de las Formas permisivas democráticas de la participación política

En la época preelectoral, en donde estaban al frente las elecciones para elegir los miembros que irían a conformar los cuerpos colegiados y posteriormente la elección de Presidente de la República, la Registraduría Nacional, propició alternativas para atender a esta población afectada en estos tiempos de guerra, aunque no tuvo salidas claras con respecto a expedición de cédulas de identidad o reconocimiento de ellas en los nuevos espacios. De hecho, se presentó una modificación del censo electoral y en esta situación, se aproximaron los grupos armados exigiendo y poniendo un modelo de autoridad para la votación por quienes respaldan.

“La democracia está en peligro”, decían algunos políticos regionales y el Estado debe ponerse al frente de esta situación, para enfrentar esta intervención irregular, pero lo cierto es que muy poco puede hacer; el desplazamiento forzado, “desbordó la capacidad del Estado colombiano y se convirtió en una verdadera tragedia humana” dice el director adjunto de la Oficina de la ONU para los derechos humanos, de allí que la insurgencia esté ganando terreno frente a un Estado que no está en capacidad de prevenir los

desplazamientos aunque la resistencia civil parece estar poco a poco enfrentándoseles, calladamente, a este modelo de los violentos, como se vio en Coconuco, Bolívar y Caldono, en el Cauca.

Un Estado que no ha puesto cuidado a las exigencias de estos sectores de la población en lo que respecta a sus vidas y bienes, menos puede garantizar los medios para subsistir dignamente y para recuperar su documentación o hacerla válida, ni para recuperar sus tierras. No obstante las sentencias de la Corte constitucional que ordena al Estado a pagar los gastos de los desplazados, incluso por encima del gasto social, este ha hecho caso omiso de ello.

Si una salida se observa en el horizonte esta tiene que ver con lo que pase con el proceso de paz. Las continuas faltas de respeto a los derechos humanos por parte tanto de los sectores armados como del ejército, contribuyen a dar cuenta de los desplazados y éstos sin saber cómo, dan rienda suelta a sus desesperanzas de diferentes maneras, buscan ser escuchados en las mesas de diálogo y allí, encontrar un aliciente para protegerse de la muerte.

Los procesos de paz que se intentaron desarrollar en Colombia, legitimaron un Estado de exclusión en el que solamente se ha logrado la renovación de las elites y no la reestructuración de la sociedad. El problema de la paz está revelando una serie de intereses políticos que miden más las fuerzas que la posibilidad de construir efectivamente una nación y un proyecto de Estado.

Los corredores establecidos por los grupos armados en toda la geografía nacional, irrumpiendo por centros agrícolas, ganaderos, piscícolas y demás, dejan una oleada de desplazados, pero al tiempo, permiten la llegada de quienes apoyan sus proyectos.

Como los políticos tradicionales, la guerrilla y las AUC también tienen propuestas de salvación para la población siempre y cuando respeten y acaten sus programas los cuales son avalados por miembros de la región en donde están ejerciendo influencia y hay ausencia del Estado. La misma Iglesia católica advirtió esta situación y puso en entredicho la futura representatividad institucional, ocasionando con ello una enérgica protesta por parte de políticos y gamonales tradicionales. En parte se ha manifestado, que el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino, fue una venganza por sus opiniones con respecto a la intromisión del dinero del narcotráfico en las campañas.

En el campo y en la ciudad de una manera relativa, esa añorada lucha por el poder de una manera directa ha tenido sus

cambios, pues ya no es que un partido quiera tal o cual alcaldía o gobernación, no, ahora avizora el comienzo de esa dislocación entre el aparato y el poder del Estado que las fuerzas insurgentes tratan de desestabilizar y para lo cual las "adhesiones" obligatorias se constituyen en un elemento fundamental.

En las sociedades rurales, los grupos armados irregulares buscan una relativa sostenibilidad. Para ello se asumen como para-estados, interviniendo en las diferentes dimensiones colectivas y aún individuales de sus pobladores. Por esa vía la guerrilla y los paramilitares intervienen en la soberanía relativa de la sociedad existente, en una especie de "recolonización" que los compromete, que los involucra en la guerra. Bajo la justificación de "rescatar", "liberar", "limpiar" los territorios se van creando formas de clientelismo armado. Ello se ha traducido en la práctica por ejemplo, en la instrumentalización del movimiento social, de la misma manera que lo ha hecho el bipartidismo. Más que una inclusión hay una subordinación de los pobladores a los actores armados.

La reafirmación de soberanías locales y regionales partidistas a partir del proceso de la fuerza parece seguir manteniéndose en cuanto a que el poder local ya no es de lealtades y adhesiones en el ámbito parroquial, propiciada por gamonales o caciques, sino por los actores armados que por la coacción y manipulación condicionan el comportamiento electoral de la sociedad civil.

Para ejemplificar, permítanme mostrar cómo la región del Pacífico, está hoy incluida en la sociedad colombiana sólo en su participación plena en la geografía de la guerra. Los índices socioeconómicos son los más deprimentes del país, la exclusión persiste junto a la miseria de la población no obstante vivir ellos, en una de las regiones más ricas por su biodiversidad natural en el mundo que beneficia e iría a beneficiar más a los otros: camaroneros, empresarios de aceite de palma, madereros e inversionistas de multinacionales, que a ellos mismos.

El narcotráfico de la década anterior y sus inversiones en proyectos mineros, pesqueros y turísticos, junto a los cultivos de coca, tuvo y tiene un fuerte accionar en la región que hoy se ve asediada por los diferentes actores armados hasta llevar sus contradicciones irracionales al arrasamiento de Bojayá y Vigía del Fuerte.

El pacífico colombiano se ha convertido en el principal expulsor de población tanto por efectos de la guerra que causan los

actores en conflicto como por políticas del Estado que en su discurso ha puesto de presente la importancia estratégica de la región como punto de contacto con la cuenca Pacífica y por ende, desarrollar políticas y planes agrícolas, ampliación de cobertura de servicios y proyectos de infraestructura como son la construcción de la carretera Panamericana en la región del Darién o el canal Atrato-Truandó que conectaría el océano Pacífico con el Atlántico.

Algo que es conveniente destacar teniendo en cuenta lo anterior es lo de la represión política, no sólo para lograr la paralización del desplazado mediante el horror, sino la imposición de unos proyectos que buscan legitimarse y ejercer en las dimensiones culturales, éticas y estéticas de la vida, toda una representación social encaminada a romper las convicciones personales cuando estas son contrarias al poder establecido, como a romper los procesos de unidad y las experiencias comunitarias de la gente que tiene unas mismas necesidades y unos mismos ideales para quebrar las convicciones que se le proponen y crear un proyecto de desarrollo que involucra un nuevo estilo de vida y de relaciones sociales.

Las comunidades indígenas y campesinas de la región han sido víctimas inimaginables de asesinatos y desapariciones forzadas por reclamar sus derechos a la tierra, a sus formas tradicionales de organización política y social y al reclamar sus identidades como grupo étnico, no obstante ser derechos constitucionales, se enfrentan a intereses ocultos sustentados en grupos económicos que se han implantado en la región o buscan establecerse y a una falta de voluntad del gobierno.

En este sentido, el nuevo gobierno tiene que presentar sus políticas de atención a esta situación irregular del accionar de los diferentes actores armados que, sin lugar a dudas, tienen también en la región, puestos sus ojos, en la medida en que se presenta un corredor estratégico de movilidad de tráfico de armas, zona de repliegue y de múltiples vías al interior y exterior, que junto a los macroproyectos de estructura portuaria los beneficiarían de manera singular. En este panorama, los que seguirían siendo más afectados son los pobladores raizales: negros e indios, que obligados a hacer respetar una legislación y a proteger su entorno social, político y económico obstaculizarían esas perspectivas y por ende, estarían sujetos a su extinción étnica.

Aquí, con ellos y para ellos una política de derechos humanos se hace necesaria e imperante.

Los planteamientos de los políticos antes de las elecciones de mayo

Lo anterior se enmarca en una coyuntura social y política que no puede dejarse de lado y que es conveniente reseñar, en la medida en que es fundamental para explicar lo que puede suceder en este proceso de inicio de un gobierno democrático en tiempo de guerra.

Ayer, los aspirantes a los cuerpos colegiados intentaron, a través de los medios de comunicación, dar rienda suelta a sus políticas ante el impedimento que presentaron los actores armados para que expusieran sus propuestas y sus programas de gobierno. Aún a costa de los impedimentos, la campaña del candidato y hoy presidente, Uribe V., manifestó que seguiría los mismos parámetros de no atacar a nadie y atendiendo a las restricciones impuestas para evitar ser atacados por los insurgentes o quienes no están con la democracia.

En este sentido, las elecciones estuvieron caldeando los ánimos de los electores y de manera sustancial, como se percibió, la insurgencia armada buscó por diversos medios obstaculizar y arrasar la *infraestructura vial*, quemar las mesas de votación y ubicar como objetivos militares a los candidatos y así, evitar que tanto las campañas como el proceso electoral tuvieran una feliz culminación.

Las grandes ciudades fueron ocupadas por las fuerzas militares para resguardar a los candidatos, a los electores y así evitar la amenaza y la intimidación.

La cancelación de compromisos previstos por los candidatos en recintos cerrados y lugares públicos obligaron a que el proselitismo se concentrara en los medios de comunicación. Los candidatos denunciaron muchas veces los problemas de sus campañas en lo que respecta a las garantías del Estado para desarrollar sus actividades políticas en varias regiones e incluso para votar libremente.

Serpa acusó a los "paras" de estar prohibiendo a la gente votar por él en Cesar, Córdoba, Magdalena, Urabá y Magdalena Medio. Uribe había denunciado que tenía serios problemas para hacer proselitismo en Meta, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Guaviare.

Las acciones terroristas

A escasas 48 horas de iniciarse las votaciones, las FARC ejercen el terror contra la población, con la voladura de puentes para impedir la comunicación y el acceso a los puestos de votación, con la

instalación de carros bombas en las vías, voladuras de torres de energía, con las tomas de carreteras y de algunas poblaciones y quemas de vehículos, además de atentados contra las sedes de la registradurías municipales, atendiendo a la consigna de: "Sabotear las elecciones".

Las mismas FARC, obligaron a salir de sus jurisdicciones a los alcaldes de algunos municipios como en el departamento de Nariño los de: Leyva, El Rosario y Policarpa y declararon objetivo militar a los habitantes que acudieran a votar.

Las confrontaciones armadas en algunos sitios del país lograron sobreponerse a favor de las fuerzas militares quienes controlaron poblaciones rurales y áreas urbanas, sin embargo, el gobierno se obligó a trasladar muchas de las mesas de votación a lugares más seguros y controlados.

Nunca en la historia del país se habían presentado unas elecciones tan difíciles: una candidata secuestrada por las FARC, la Dra. Ingrid Bentancour y otro que fue objeto de varios atentados y restricciones para salir a la plaza pública el Dr. Álvaro Uribe. Muy costosas resultaron las elecciones no sólo en cantidad de dinero sino en número de muertos. La situación crítica del país hizo de las elecciones una odisea.

Resultados electorales - La abstención

La abstención promedio posterior al Frente Nacional:1974 a 1998, alcanzó el 51.55%. La de las presidenciales de 2002 llegó a 53.72%. En donde el potencial político era de 24.208.150 personas. La victoria de Uribe es el resultado de la radicalización de un sector significativo de la población. La abstención rural marcó el desinflexo de las expectativas de un movimiento como el Polo Democrático que a tres días de las elecciones lograba un 11% según las encuestas y terminó con un 6.8%. Esto lo atribuye Luis Garzón su candidato, a que "todo el mundo encerrado muerto de miedo, los medios diciendo que iban a matar a Uribe, que Garzón estaba amenazado...todo se volvió voto útil y la gente votó por evitar la segunda vuelta". Mientras otros como el historiador Juan Carlos Flores manifiesta: "nuestra izquierda no puede limitarse a un proyecto nacional, necesita poder local".

Pero lo que alcanza a observarse es que el proselitismo armado que hicieron autodefensas y guerrilla para presionar a la gente para que votara o dejara de votar por uno u otro candidato, pareció funcionar, pero al revés.

No obstante las acusaciones de uno y otro candidato con respecto a las intimidaciones y obstáculos para los votantes, el hecho es que tanto uno como el otro de los que ocupaban el primer y segundo porcentaje, sacaron buena votación en las regiones que habían señalado tener dificultades.

Pero también, la radicalización tiene como referencia a los votantes urbanos. En las cuatro principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, el hombre de "corazón grande" obtuvo el 59.85% de los votos, su contendor inmediato sólo el 23.94% y en las 13 siguientes capitales, los dos candidatos obtuvieron el 53.07% y el 38.35% respectivamente. Dando una muestra de cómo los centros urbanos perciben el temor del terror de una ofensiva armada.

Colombia, con 9 millones de ciudadanos en la miseria, un 57% en la pobreza, un 18% de desempleo y 6 millones de subempleados, con un potencial electoral de más de 24 millones, con problemas económicos que la aquejan como son el bajo crecimiento, el desempleo, una delicada situación fiscal y una deuda pensional, la abstención se paseó a sus anchas sobretodo en aquellas regiones afectadas por la presencia guerrillera y paramilitar, lo cual muestra que sí hubo intimidación por parte de los actores armados.

El observador de la OEA dijo: "el miedo a eventuales actos violentos, así como a las amenazas, intimidaciones y constreñimientos que se presentaron durante el desarrollo del proceso, muy probablemente impidieron a ciudadanos con el ánimo de votar a abstenerse de hacerlo".

Paz Colombia manifiesta que "sólo votaron 46 de cada 100 potenciales votantes" y agrega que a la gente le dio miedo salir a sufragar.

En síntesis, podría señalarse que la abstención pasó del 49.5% en la primera vuelta del año 1998 a casi 54% en esta de mayo y en donde más se hizo manifiesta fue en la Amazonía, el Chocó que superó el 70% y en la mayoría de la Costa Atlántica, Arauca, Nariño y Cauca estuvo entre el 60% y el 70%, zonas estas de presencia guerrillera y paramilitar.

Cifras muy dicientes son las que se presentaron en los departamentos de Cesar, Córdoba, Magdalena y en la costa norte en general, en donde el candidato Serpa encabezó la votación no obstante ser éstos fuertes en presencia paramilitar.

La amenaza de los grupos armados al margen de la ley en las zonas de su influencia, de todas maneras, fue condicionante

para las votaciones, no obstante que existe un hecho tradicional de la votación que en la segunda vuelta es mayor que en la primera.

Pero sin lugar a dudas, las elecciones presidenciales del 2002, marcaron el final de los partidos tradicionales, lo cual reitera la tesis de su crisis definitiva. (UN. Periódico: junio 2002) o la transformación del bipartidismo en un sistema de partido dominante, el liberal, sin contendor.

La situación actual. El resultado político de la contienda electoral.

La propuesta de las FARC de despejar en un principio el área de tres departamentos para unas futuras negociaciones políticas de paz, intenta desde ya, conocer la opinión del presidente electo y sus intenciones de negociarla. La misma está siendo respaldada con una nueva estrategia, emprendida hoy, para agilizar la negociación y es la de hacer desaparecer el Estado en un territorio: Caquetá, Putumayo y parte del Huila, para eso ha declarado objetivo militar a 16 alcaldes del Caquetá si no abandonan sus municipios y ya asesinaron al alcalde de Solita para presionarlos y obligarlos a renunciar a 5 del Huila y busca expandirse hacia el Cauca.

Como los sucesos se dan tan rápidamente, ya en la actualidad son los gobernadores de los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre, Bolívar y Arauca, quienes junto con los alcaldes de muchos de sus municipios y demás funcionarios del gobierno, han sido amenazados por las FARC. Los alcaldes han solicitado autorización al gobierno central para mediación con la insurgencia.³ Cuando se redactaba este ensayo, nuevos funcionarios de los departamentos acusan las amenazas: Casanare, y los Santanderes, y hasta la capital del país, dan muestra del acoso insurgente que se suma a la cadena de amenazas que vienen realizando las FARC desde comienzos del mes de mayo. El gobierno central manifiesta que solo los gobernadores pueden aceptar las renunciaciones.

“Los que no cumplan con esta determinación, pueden capturarlos o ajusticiarlos” dice el comunicado de uno de los frentes guerrilleros y agrega: “Nuestra consigna es no dejar funcionar a ningún representante del Estado en ninguno de los municipios. En la búsqueda de paralizar la autoridad legal, la insurgencia está incitando a un enfrentamiento con las comunidades o a que las AUC presionen a los alcaldes para que no renuncien. Sin embargo, los mandatarios siguen saliendo de sus municipios y cerrando las alcaldías.

Este ataque va directo al corazón mismo de la democracia, que es el derecho inalienable que asiste al pueblo de elegir a sus gobernantes. Contradicción de la insurgencia que ataca un valor universal que ella misma debería reivindicar. En los años 80, las FARC clamaban por la elección popular de alcaldes y hoy quieren eliminar a los gobernantes que el pueblo elige.

La debilidad del Estado se ha puesto de presente frente a esta agresión de la institucionalidad por la vía armada, que no encuentra medios para impedirlo. Desde enero del 2001, 13 alcaldes han sido asesinados y 16 secuestrados. En algunos pueblos jueces y fiscales han tenido que salir para no enfrentar las amenazas. El gobernador del Caquetá tiene un ultimátum perentorio. En los municipios en donde ganó el candidato Álvaro Uribe, las amenazas de las FARC han sido perentorias por haber desobedecido.

El "despeje" a la fuerza que comenzaron las FARC, se extendió a otros cinco departamentos del país e incluso ha incluido a representantes a la Cámara. Por ejemplo en Arauca, se dio un plazo de 10 días para que renuncien a sus cargos los 7 alcaldes del departamento, los 77 concejales, los 11 diputados, los 2 parlamentarios y el Gobernador quien manifestó que no puede garantizar la seguridad de todos los amenazados.⁴ La situación se ha extendido a otros departamentos como Santander, el Cesar y el Cauca. En este último, los mandatarios municipales de Bolívar, Almaguer, San Sebastián, La Vega, Santa Rosa y Piamonte, llegaron con su carta de renuncia donde el gobernador indígena del departamento Floro Tunubalá Paja quien no la aceptó y procedió a una reunión con los 18 alcaldes amenazados para concretar las acciones de la guerrilla que quiere efectuar una zona de distensión o de despeje a la fuerza, en este departamento. Solicitó igualmente al Ministerio del Interior, apoyo logístico, seguridad y recursos para incentivar a los 41 alcaldes y así evitar que renuncien ante las amenazas de los armados.

Lo anterior ha sido considerado por un investigador como "es el paso mas osado de las Farc en su lucha contra el Estado de Derecho. El objetivo es provocar la más grave crisis de gobernabilidad, crear vacío de autoridad y ejercer el poder, sin pasar a una guerra de posiciones sino desdoblándose en pequeños frentes, rehusando la lucha abierta para evitar ser golpeados"(Acevedo 2002).

La renuncia masiva de alcaldes y funcionarios municipales, hace parte de un vasto plan de las FARC que pretende derrocar el

poder local del estado y en su lugar, imponer unos nuevos órganos que dependerían de la guerrilla y que estarían conformados en buena medida por las actuales juntas veredales y las de acción comunal, “transformarlas y asumir su conducción”. La orden impartida por el “Estado mayor central” de las FARC es la de incidir en la convivencia discutida y aprobada por la comunidad. “Son el germen de las nuevas leyes democráticas y revolucionarias”, dice el texto.

Pero también, la estrategia es la de imponer un sistema de pirámide, mediante el cual las decisiones tomadas por los comités veredales serán llevadas a una instancia superior llamada comité municipal, que estaría integrado por los presidentes de los comités veredales. También habría una especie de asambleas municipales. El defensor del pueblo se manifestó al respecto diciendo que “esa situación de instrumentalización de la comunidad” puede dar lugar a que también los paras intervengan en ese asunto. Para las FARC, ésta “será un poder extra-institucional que se legitimará en una confrontación política directa con las instituciones del Estado”. En esta situación se puede ya observar el riesgo en que están las comunidades y con ello, el escalamiento del conflicto.

El Gobernador del Cauca, ya señala su preocupación con respecto a la llegada de los paramilitares al departamento, motivados por la preocupación y miedo con respecto al aumento de las fuerzas sociales que han logrado resultados en educación, en salud, en autonomía. Esto genera temor y lleva a fuertes reacciones, entre otras, de carácter militar. El conflicto es claramente palpable.

La Unión Europea ante la gestión del presidente de turno, incluyó en la lista de organizaciones terroristas a las FARC que así, condicionó la participación de éstas en el proselitismo en Europa y le obstaculizó otras muchas de las ventajas que tenía la insurgencia en los 15 países de la unión. La repuesta de esta organización fue que “o da muestra de la ligereza de la petición o, por el contrario, la malintencionada actitud para ilegitimar un eventual inicio a un proceso de paz durante el próximo gobierno y por el contrario, profundizar aún más el estado de confrontación militar”.

El presidente electo, Álvaro Uribe, empezó solicitando la mediación internacional (ONU) para darle una salida al conflicto armado tal como lo había prometido en su campaña, si salía electo, desde agosto del año 2000 y así reanudar las negociaciones con las FARC “siempre y cuando abandonen el terrorismo y el cese de hostilidades” lo que para algunos analistas políticos “es una muestra

de realismo”⁵ en la medida en que “son pocas las posibilidades de una victoria militar y porque la negociación directa se ha agotado”, agrega el analista.

Muchos se han consternado por esta propuesta de vaivén que pasa del guerrerismo a la solución negociada y aseguran no era la misma que había hecho el candidato antes de su elección y hasta llegan a preguntarse qué hubiera pasado: Uribe hubiera ganado el favor electoral con esta tesis como bandera de campaña?, Sin embargo, la explicación está por la unidad nacional y por el temor a la oposición.

Los organismos internacionales ya se han pronunciado al respecto y manifiestan que las amenazas constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario, pues dejan a la población civil en una situación de desprotección y abandono ante la provocada ausencia del Estado.

El gobierno se ha pronunciado en el sentido de expedir decretos que permitan a los mandatarios gobernar desde las capitales departamentales o en su defecto desde bases militares. El propio presidente de la república ha pedido a los alcaldes y concejales amenazados, no renunciar ni abandonar los cargos para no generar un vacío de poder, que es lo que buscan los terroristas, ante la consigna de las FARC de no dejar a ningún representante del Estado en ninguno de los municipios. Esta nueva estrategia sin lugar a dudas, busca profundizar el conflicto y avanzar hacia una fase superior en la que no sólo ejercen control territorial, sino imponen autoridad y gobiernos de transición, así se avencinan tiempos difíciles en los que la guerrilla intenta imponerse a sangre y fuego, frente a esta situación el Defensor del Pueblo es partidario de declarar el estado de conmoción interior pues “está en juego la institucionalidad y la convivencia ciudadana, que son causales precisas para que el Presidente pueda decretar la conmoción”. Sin embargo, voces contrarias ya son escuchadas en el sentido de que se afectarían los procesos democráticos de soberanía que llevaron a los alcaldes a los cargos de elección popular.

Han surgido voces que piden al Estado que decrete la conmoción interior como una medida de excepción para defender la institucionalidad, sin embargo ellas no suenan al interior del mismo, otras piden “instrumentos permanentes - legales, económicos, políticos- para garantizar la seguridad de los ciudadanos y así lograr la vigencia del Estado de Derecho y con él,

seguramente se obligará a restricciones de algunas libertades individuales.

Se está en mora de liderar un esfuerzo que convoque a los habitantes del país para que defiendan y refrenden su legitimidad y la de sus autoridades, pues estos serían los únicos que podrían parar las amenazas y la guerra popular que al estilo maoísta han entronizado las FARC, en donde cabe el sabotaje, el secuestro, el uso de armas no convencionales y el castigo a quienes están al frente de un aparato opresor.

No obstante la evidente impotencia del Gobierno de proteger a los 180 alcaldes⁶ amenazados por las FARC, las comunidades de algunas poblaciones, aunque tímidamente, han tenido que salir en defensa de sus gobernantes, se han ido como multiplicando las movilizaciones cívicas en señal de protesta frente a las estrategias de las FARC de desterrar cualquier vestigio de autoridad estatal en los municipios, parece ser ésta la única alternativa de confrontación civil.

A esta fecha, ya son 40 los alcaldes renunciados, 280 concejales han abandonado sus cargos, 30 juzgados han cerrado y 300 jueces y funcionarios han dejado su jurisdicción en 10 departamentos. El coraje de los otros obedece a acciones personales y al apoyo de las comunidades. Algunos mandatarios despachan desde las capitales municipales. Lo que se está viendo es cómo las Farc han puesto en marcha un plan para imponer un avance militar territorial a un costo mínimo con el fin de forzar una negociación ventajosa que sólo las movilizaciones cívicas podrán confrontar aunque aún son insipientes las movilizaciones de resistencia civil, de todas formas dejan ver de alguna forma, el respaldo a sus gobernantes y no pueden subestimarse por parte del grupo armado.

De todas maneras si estas movilizaciones populares son espontáneas, tendrán sus efectos positivos no así si ellas son manipuladas con fines políticos y por ello, deben ser cuidadosamente definidas e incluso, el Gobierno no puede escudarse en ellas para eludir responsabilidades, por el contrario, debe, junto a sus fuerzas armadas, cumplir con las obligaciones y así apoyar las movilizaciones civiles.

Hay que tener en cuenta, como lo señala Carlos de Roux, ex consejero presidencial de los DD.HH, que el concepto de una "ciudadanía militante" se dio en la revolución francesa, "en una sociedad democrática, ese llamado a militar (vincularse a la milicia, ser ciudadano activo en defensa de la institucionalidad, tributar) tiene mucha fuerza".

De todas maneras, el nivel de participación que puede reclamar el Estado es un interrogante pues cuando la institucionalidad comete errores y abusos quién la supervisa? El apoyo de la comunidad es para la guerra? Son interrogantes que aún quedan en el aire y que es conveniente ir aclarando con respecto a lo que sería la insurgencia civil.

Conclusiones

El desplazamiento forzado sigue siendo la mayor expresión de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En el contexto de las disputas por el dominio territorial y por la composición económica, social, política, cultural y demográfica de las zonas rurales y urbanas, ha convertido a la población civil en el objetivo principal

La atención a la población desplazada por el conflicto interno aún no ocupa un lugar prioritario en la agenda del Estado que más se ha preocupado por resolver el conflicto político interno que enfrenta con respecto a las coyunturas del accionar político-electoral del país.

No existe una conciencia ciudadana frente al fenómeno del desplazamiento, este se ha mantenido oculto, por lo tanto, la segregación y estigmatización del desplazado atenta contra sus derechos humanos en cuanto a su participación política, económica y social.

Las precarias expresiones organizativas de los desplazados han sido canalizadas por los actores del conflicto y en esta medida con el amedrentamiento, al ser considerados objetivos militares, les han obstaculizado su accionar.

En las actuales circunstancias, de amenazas a la democracia formal, el Estado debe proveer los mecanismos de una participación popular y junto con las formales, procurar el replanteamiento de una política de paz acorde a las circunstancias.

De destacar es, en esta coyuntura nacional, cómo, en un principio, se vio la ausencia de una participación de la sociedad civil en lo que respecta a un apoyo o solidaridad a sus gobernantes, pero que con el transcurrir el tiempo, ellas, aunque tímidamente, han ido expresando su apoyo a través de una resistencia civil, esto sin lugar a dudas debe ser motivo de reflexión y análisis de los politólogos.

Referencias Bibliograficas

- BELLO, Martha Nubia. 2000. "Las familias desplazadas por la violencia: Un tránsito abrupto del campo a la ciudad". *Revista Trabajo Social*, (2).
- CODHES-SISDES. 2001. "Desplazamiento en Colombia durante el primer trimestre del 2001". Bogotá.
- CUBIDES, Fernando e DOMINGUEZ, Camilo. 1999. *Desplazados, migraciones internas y reestructuración territoriales*. Bogotá: CES-Universidad Nacional.
- GUEVARA CORRAL, Rubén Darío. 2002. *Desplazamiento y Derechos Humanos*. Mimeo Univalle Cali.
- _____. 2002. *Mujeres Desplazadas por el conflicto interno. Situaciones de género en Cali y Popayán*. Informe de Investigación. Asprodeso. Popayán.
- Memorias del Encuentro Internacional sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Octubre de 2000. "Colombia: Construcción democrática de la paz". San José de Costa Rica.
- OSORIO, Flor Edilma. 2002. *Los desplazados en Colombia: rupturas y reconstrucciones de procesos vitales*. Manucrito.
- Red de Solidaridad Social. 2001. *Atención a la población desplazada por violencia en Colombia*. Informe de gestión. Enero 2000-junio 2001. Bogotá.

Notas

¹ NE: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

² NE: Autodefensas Unidas de Colombia.

³ Cf. El Tiempo, Junio 20 -2000.

⁴ Cf. El Tiempo, Junio 13 de 2002.

⁵ Valencia L., El Tiempo Junio 14 2002.

⁶ El Tiempo julio 9 del 2002.